



Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 3295/2014/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: LEMOS, CHRISTIAN RICARDO Y OTRO s/EVASIÓN SIMPLE
TRIBUTARIA y INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA QUERELLANTE: AFIP - DGI, MARIA ANTONELA

Bahía Blanca, de octubre de 2020.

AUTOS Y VISTO:

Para resolver en el presente expediente N° **FBB 3295/2014/TO1**, caratulado: “**LEMOS, CHRISTIAN RICARDO Y LEMOS DE MESCHINI, MÓNICA LILIANA S/EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA-INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA**, del registro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca,

Y CONSIDERANDO:

1ro.) Que, el 03 de noviembre del 2017, el Tribunal unipersonal integrado para ese entonces por el Sr. Juez de Cámara Dr. Juan Leopoldo Velázquez, resolvió: “...**1ro.) SUSPENDER LA ACCIÓN PENAL** respecto a la obligación tributaria denunciada en autos, con el efecto **INTERRUPTIVO** del curso de la prescripción (arts. 52 y 54 ley 27.260). **2do.) DENEGAR LA SUSPENSIÓN** pretendida para el hecho calificado como insolvencia fiscal fraudulencia como cometido en esta ciudad, entre los meses de Septiembre de 2002 y Abril de 2003, por el que fueran **requeridos Christian Ricardo Lemos y Mónica Liliana Lemos.**”; resolución que fuera recurrida por el Defensor Particular de los encausados, Dr. Mariano Gastón Segre.-

El 3 de julio del 2019 la Sala I de la Excma. Cámara Federal de Casación Penal, dispuso por mayoría: “**I) HACER LUGAR** al recurso de casación interpuesto por la defensa particular; **CASAR** el punto 1ª de la resolución recurrida y, en consecuencia, **SOBRESEER** a Christian Ricardo Lemos y a Mónica Liliana Lemos de Meschini en orden al delito de evasión al impuesto al valor agregado (IVA) por los ejercicios fiscales 2002 y 2003 (Arts. 1, Ley 27.430 y 336 inc. 3º del CPPN; **II) ANULAR** el punto 2º de la decisión impugnada en relación al hecho calificado como delito de insolvencia fiscal fraudulenta y, en consecuencia, **III) REENVIAR** las actuaciones a fin de que el tribunal de origen se pronuncie de conformidad con lo aquí resuelto, **SIN COSTAS** (Arts. 470, 471, 530 y 531 del CPPN).”. Sentencia que fuera recurrida por el Ministerio Público Fiscal, declarando dicho Tribunal su





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 3295/2014/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: LEMOS, CHRISTIAN RICARDO Y OTRO s/EVASION SIMPLE
TRIBUTARIA y INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTE QUERELLANTE: AFIP - DGI, MARIA ANTONELA

inadmisibilidad en los términos de los arts. 14 y 15 de la ley N° 48, 257, 68 y 69 del CPCCN, y 532 del CPPN; circunstancias que llevaron a que ese Ministerio, interponga recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que a la fecha se encuentra en trámite.

2do) Que, el día 25 de agosto del corriente año, los representantes de Afip-DGI, en su carácter de querellantes, atento lo resuelto por la Excma. Cámara Federal de Casación Penal en los puntos II) y III), peticionaron se dicte un nuevo pronunciamiento en punto al delito de insolvencia fiscal fraudulenta y atendiendo la solicitud de suspensión de la acción requerida por la defensa en los términos de la Ley N° 27.260, la posición asumida por las restantes partes; o se fije audiencia de debate.

El Tribunal, previo a expedirse acerca de la petición verificó si se registraba algún recurso interpuesto contra la resolución de la Alzada, certificándose por Secretaría que se encuentra tramitando actualmente un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, por recurso extraordinario denegado, por lo que con fecha 15 de septiembre dispuso no hacer lugar a lo solicitado por la parte querellante.

3ro.) Que los Dres. Gustavo Andrés Romanelli y Federico José PEDRERO, en nombre y representación de la Administración Federal de Ingreso Públicos interpusieron recurso de reposición en los términos del art. 446, instando se revoque contrario imperio dicha denegatoria en virtud del estado de autos, teniendo presente que lo resuelto por la Alzada se encontraba firme y pasado en autoridad de cosa juzgada en relación al punto referido —insolvencia fiscal fraudulenta—, imputación que comprende mayores circunstancias y excede el perjuicio ocasionado por la evasión. Ello, en virtud de que la vía recursiva instada por el Ministerio Público Fiscal tuvo en miras la revisión del criterio adoptado por la Cámara Federal de Casación Penal en orden a la aplicación de la ley n° 27.430 como *ley penal más benigna* al hecho investigado como evasión impositiva.





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 3295/2014/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: LEMOS, CHRISTIAN RICARDO Y OTRO s/EVASION SIMPLE
TRIBUTARIA y INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA QUERELLANTE: AFIP - DGI, MARIA ANTONELA

4to) Que, corrida vista en los términos del art. 447 del CPPN, el Sr. Fiscal General Adjunto dictaminó que asiste razón al planteo de la querella.

En primer lugar, señaló específicamente en lo que aquí respecta, que la decisión impugnada por ese Ministerio Público Fiscal únicamente fue por el sobreseimiento dictado, recurso cuya denegación (conf. 1400) motivó la queja que se encuentra pendiente de resolver en el expediente n° FBB003295/2014/TO1/2/1/1/1/RH001, del registro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Asimismo, aclaró que si hipotéticamente se hace lugar a la queja, se mantiene la suspensión por los hechos de evasión dispuesta originalmente por el Tribunal y, en cambio, si no se hiciera lugar al remedio impugnativo directo, queda vigente el escenario trazado por la propia Cámara Federal de Casación Penal en su resolución.

En tal sentido, manifestó que del estado de la causa se desprende que está pendiente de resolver si la acción penal contra los imputados por los hechos abarcados por la insolvencia fiscal fraudulenta queda, o no, suspendida y sujeta a la incorporación al régimen de regularización de deudas tributarias y de exención de intereses, multas y demás sanciones establecido en la ley 27.260 (conf. su art. 54).

5to.) Previo a ingresar al tratamiento de la cuestión a resolver resulta necesario aclarar, a los fines de la claridad de la presente, que en primer lugar este Tribunal se expedirá en relación al recurso de reposición interpuesto por la parte querellante, para luego analizar si atento al estado de autos, corresponde hacer operativo lo ordenado por la Cámara Federal de Casación Penal respecto al punto II) y III) del resolutorio de fecha 3 de julio de 2019 y dictar un nuevo pronunciamiento; y en su caso si debe ser suspendida la acción penal por la aplicación de la ley 27.260 o bien denegando el instituto.

Así pues, de manera liminar, estimo atinente resaltar que visto lo aducido por las partes, la resolución de la Alzada en cuanto dispuso: “**II) ANULAR**





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 3295/2014/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: LEMOS, CHRISTIAN RICARDO Y OTRO s/EVASION SIMPLE
TRIBUTARIA y INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTE QUERELLANTE: AFIP - DGI, MARIA ANTONELA

*el punto 2º de la decisión impugnada en relación al hecho calificado como delito de insolvencia fiscal fraudulenta y, en consecuencia, **III) REENVIAR** las actuaciones a fin de que el tribunal de origen se pronuncie de conformidad con lo aquí resuelto”, no fue atacada por la vía recursiva intentada por el Sr. Fiscal General, ello por no existir agravio para esa parte.*

Que frente a este escenario, entiendo que no existe cuestión conflictiva que impida resolver y, por lo tanto, asiste razón al peticionante por los fundamentos expuestos en sus presentaciones, los cuales se dan por reproducidos en mérito a la brevedad y celeridad procesal.

Que en consecuencia, habrá de admitirse el recurso de reposición planteado, revocando por contrario imperio el decreto dictado el día 15 de septiembre de 2019 y adelantando que habrá de dictar nuevo pronunciamiento conforme lo ordenado por la Alzada.

Zanjadas las dos primeras cuestiones, corresponde recordar que las actuaciones principales se iniciaron por denuncia de la Administración Nacional de Ingresos Públicos (Afip-DGI) por los delitos de evasión fiscal e insolvencia fiscal fraudulenta (conf. 9/49), contemplados para ese entonces en los arts. 1 y 10 de la Ley 24.769, calificación legal que fue sostenida por parte del Sr. Fiscal Federal de instrucción al momento de requerir la elevación a juicio (fs. 281/283), tanto por la parte querellante (fs. 265/279)

En esta línea, corresponde señalar que -en lo que aquí nos respecta- la cuestión a resolver se vincula con el segundo de los delitos acusados, esto es la insolvencia fiscal fraudulenta y si es factible la aplicación de la ley 27.260 frente a esa imputación penal.

Asimismo, es pertinente recordar que la insolvencia tratada en el Régimen Penal Tributario concurre materialmente con la de evasión imputada, siendo conductas diferentes, con un respectivo grado de autonomía de los delitos en estudio.





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 3295/2014/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: LEMOS, CHRISTIAN RICARDO Y OTRO s/EVASION SIMPLE
TRIBUTARIA y INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA QUERELLANTE: AFIP - DGI, MARIA ANTONELA

De este modo, conforme la descripción del hecho aquí investigado, resulta que el objeto procesal de las presentes actuaciones además de girar en torno a una distorsión de alguno de los elementos de la obligación tributaria con capacidad de generar una deuda, como es el caso de la evasión, en la insolvencia fiscal fraudulenta la acción típica investigada consiste en provocar o agravar la insolvencia con conocimiento de la iniciación de un procedimiento administrativo o judicial tendiente a la determinación o cobro de obligaciones tributarias, entendida la primera acción como la de causar, inducir o crear la capacidad de cumplir las obligaciones fiscales y en cuanto a agravar implica agudizar o aumentar la insolvencia existente, conductas que van más allá de la presunta operatoria de evasión impositiva.

Continuado con el análisis, cabe destacar que la Ley n° 27260 denominada “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados” (B.O. 22/07/16) la cual debe estudiarse a la luz del delito enrostrado, estableció un Régimen de Sinceramiento Fiscal en su Libro II, permitiendo a los contribuyentes acogerse al régimen de regularización de deudas tributarias.

Asimismo, de la misma exposición de motivos de la ley 27.260 se advierte que el legislador implantó el régimen de regularización bajo análisis con el objetivo de recaudar los fondos necesarios para solventar, entre otros gastos públicos, el Programa Nacional de Reparación Histórica para jubilados y pensionados; concediéndose la posibilidad del otorgamiento de extinción de la acción penal, con el claro objetivo que los sujetos activos de diversos procesos penales y administrativos regularicen sus obligaciones.

Por su parte, el art. 52 relata que: *“Los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos podrán acogerse por las obligaciones vencidas al 31 de mayo de 2016, inclusive, o infracciones cometidas relacionadas con dichas obligaciones con excepción de los aportes y contribuciones con destino al sistema de obras sociales y las cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo, al régimen de regularización*





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 3295/2014/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: LEMOS, CHRISTIAN RICARDO Y OTRO s/EVASION SIMPLE
TRIBUTARIA y INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA QUERELLANTE: AFIP - DGI, MARIA ANTONELA

de deudas tributarias y de exención de intereses, multas y demás sanciones que se establece por el presente Título.”.

El acogimiento previsto en el mencionado párrafo podía formularse entre el primer mes calendario posterior al de la publicación de la reglamentación del régimen en el Boletín Oficial hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive¹ y su procedencia se sujetó a la verificación de diferentes requisitos objetivos (vinculados con las deudas a regularizar) y subjetivos (relativos a los sujetos que podían verse beneficiados).

Circunstancias éstas que tienen que ser vistas bajo la lupa del art. 53 de citada legislación, en cuanto al tipo de obligaciones que pueden someterse a este instituto, refiriéndose a las obligaciones que estén en curso de discusión administrativa o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial a la fecha de publicación de la ley 27.260, en tanto el demandado se allane incondicionalmente por las obligaciones regularizadas y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos.

La situación descripta precedentemente no se ve presente en autos, en virtud de que en el acogimiento al plan de pago por parte de la sociedad “SOMEL S.A.” no incluyó parte de la deuda que registra en el órgano recaudador, importes que se vinculan con el delito de insolvencia fiscal fraudulenta, esto es la multa del impuesto a las Ganancias, periodo fiscal 2001 y ajuste de IVA periodo fiscal 2001.

En este orden, no es ocioso destacar que en el plan de pagos formulado por “SOMEL S.A.”, no fueron incluidas: la suma de \$ 288.867,08 por deuda de IVA ejercicio fiscal 2001, la multa de \$ 1.669.074,24 del impuesto IVA, períodos fiscales abril/agosto y octubre/diciembre 2000, enero y febrero 2001 (ejercicio fiscal 2001) y marzo/noviembre 2002 (ejercicio fiscal 2003) y \$334.527,48 en concepto de multa del impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2001.

¹ Nota Infoleg: por art. 1º de la Resolución General Nº 3920/2016 de la AFIP B.O. 29/07/2016 se establece que el acogimiento podrá formularse entre los días 1 de agosto de 2016 y 31 de marzo de 2017, ambos inclusive.





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 3295/2014/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: LEMOS, CHRISTIAN RICARDO Y OTRO s/EVASION SIMPLE
TRIBUTARIA y INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA QUERELLANTE: AFIP - DGI, MARIA ANTONELA

En tal sentido, entiendo que no se ha verificado que el pago abarcara la totalidad de las sumas adeudadas al Fisco como consecuencia del estado de insolvencia o, por su parte, haya sido implicado una renuncia o desistimiento de materia tratada en sede administrativa, más allá de lo que respecte al proceso de concurso preventivo llevado a cabo en sede de Juzgado Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

Por otra parte, coincido con el criterio oportunamente expuesto en autos por la Dra. María Cristina Manghera, Fiscal General para ese entonces, que entendió que el art. 54 de la ley 27.260, exige que se regularice y cancele, respectivamente, la obligación tributaria adeudada relacionada con aquel hecho ilícito, con lo cual, mal podría aplicarse a un caso en el cual la imputación no se relaciona en forma directa con una obligación tributaria adeudada, sino con la presunta actitud adoptada por los aquí imputados, quienes al tomar conocimiento de la iniciación de diversos procedimientos administrativos y judiciales tendientes a la determinación y cobro de sus obligaciones tributarias o aportes y contribuciones de la seguridad social, habrían provocado la insolvencia de la firma que representaban, frustrando el cumplimiento de aquella, o bien utilizando el traspaso de obligaciones a sociedades conformadas por los investigados.

Ello, más allá que el caso en examen se encuentre fuera de las exclusiones expresamente tipificadas por el legislador en los arts. 83 y 84 de la ley 27.260 y en los conceptos y sujetos excluidos por el art. 3 de la Resolución General AFIP 3920/2016, lo cierto es que la figura por la cual se requirió la elevación a juicio de los imputados es mucho más amplia y si bien pueden reputarse escindibles las acciones que integran el delito investigado, todas configuran una unidad delictiva tendiente a frustrar en todo o en parte el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

En esta línea, si bien la figura en análisis se trata de las maniobras llevadas a cabo con el objetivo de boicotear el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, no refiere puntualmente a ellas en sí mismas, comprendiendo mayores circunstancias que las que rodean a la conducta achacada como evasión





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 3295/2014/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: LEMOS, CHRISTIAN RICARDO Y OTRO s/EVASION SIMPLE
TRIBUTARIA y INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA QUERELLANTE: AFIP - DGI, MARIA ANTONELA

impositiva -hoy en recurso ante la CSJN-, siendo que comprende mayores situaciones y excede el perjuicio ocasionado por la evasión.

Lo antedicho guarda correlación con los señalado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, que si bien el precedente se analizaba la figura de simulación dolosa de pago, entiendo que se puede entreverar con la aquí tratada, de esta manera sostuvo en el voto de la mayoría que: *“En este contexto, se presenta como suficientemente fundada la aseveración del juzgado instructor en tanto expresó que “...este régimen excepcional [de la ley 27.260] no alcanza a todas las acciones penales emergentes de la ley 24.769, sino solo aquellas que estén vinculadas a una obligación susceptible de ser cancelada mediante pago (vgr. Evasión o apropiación indebida de tributos) pues los arts. 52 a 62 de la Ley N° 27.260 hacen expresa referencia a cancelación de deuda, capital, multas e intereses para la suspensión o extinción de la acción penal...” (cfr. fs. 17/20 vta.).”*²

Asimismo, dicha opinión fue mantenida en el reciente fallo de la Excm. Cámara Federal de Casación Penal en el expediente 1476/2016/2/CFC1, en el que el Dr. Borinsky expresó *“...[c]on relación al citado régimen especial, tuve ocasión de señalar como juez de este Tribunal, que el acogimiento al régimen de regularización en estudio por parte del contribuyente en orden a sus presuntas evasiones tributarias no conlleva la suspensión de la acción penal relacionada a conductas no vinculadas con el eventual incumplimiento de obligaciones fiscales”*.³

Por último, como viene denotándose de la presente, la ley 27.260 es una norma perteneciente al ámbito extrapenal, utilizada como una herramienta de la política económica que lleva a confluir efectos en el ámbito penal, por lo que es atinado recordar las palabras del Dr. Carlos Alberto Mahiques en la causa CPE651/2010/28/CFC2, en donde sostuvo que: *“Así es entonces que una adecuada hermenéutica en este especial ámbito normativo requiere tener en consideración los particulares propósitos que lo informan y su compatibilidad con los objetivos propios*

²CFCP, Sala IV, Voto Dr. Mariano Hernán Borinsky, compartido por el Dr. Juan Carlos Gemignani, en autos n° 12012962/2012/4/CA3, “SZCZECH, Néstor Iván s/ recurso de casación”, 14/12/2017.

³ CFCP, Sala IV, 1476/2016/2/CFC1, “Moncada, Mariano y otros s/recurso de casación”, Reg. N° 296/20.4, 9/03/20





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 3295/2014/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: LEMOS, CHRISTIAN RICARDO Y OTRO s/EVASION SIMPLE
TRIBUTARIA y INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA QUERELLANTE: AFIP - DGI, MARIA ANTONELA

del derecho penal de evitar la impunidad por hechos delictivos que vulneren los bienes jurídicos protegidos. Sobre todo, en el ámbito penal económico, donde la evasión es “uno de los peores males que el país soporta... es el gravísimo perjuicio social causado por la ilegítima afectación del régimen de los ingresos públicos que proviene de la evasión o bien de la demora en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En la medida en que su competencia lo autorice, los jueces tienen el deber de contribuir a la aminoración de esos dañosos factores y comprender que son disvaliosas (Fallos 302:1284) las soluciones que involuntariamente los favorecen” (CSJN, Fallos 313:1423; 327:5521; 328:3720; 330:2186).”⁴

Por los fundamentos dados, debe aceptarse el recurso de reposición, dictar un nuevo pronunciamiento denegando la suspensión de la acción penal en relación al hecho calificado como insolvencia fiscal fraudulenta.

Por todo ello,

RESUELVO:

1ro.) HACER LUGAR el recurso de reposición interpuesto por los representantes de la parte querellante, AFIP-DGI. Dres. Gustavo Andrés Romanelli y Federico José Pedrero, y **REVOCAR** por **CONTRARIO IMPERIO** el decreto de fecha 15 de septiembre del corriente año (arts. 446; 447 y 448 del CPPN).

2do.) DENEGAR la suspensión de la acción penal en relación al hecho calificado como insolvencia fiscal fraudulencia pretendida por el Dr. Mariano Segre en beneficio de sus asistidos Christian Lemos y Mónica Liliana Lemos.

Regístrese, notifíquese, oficiese y cúmplase con lo dispuesto en las Acordadas 15/2013 y 24/2013 de la CSJN, haciendo saber a las partes que rige la acordada de la CFCP 6/20.-

PABLO ESTEBAN LARRIERA
JUEZ DE CÁMARA

Ante mí: MARÍA CECILIA YAPUR
SECRETARÍA DE CÁMARA

⁴ CFCP, Sala III, CPE 651/2010/28/CFC2, “ZAGLUL, Aaron Francisco; MIJALEVICH, Martín s/ recurso de casación”, Reg. 145/19, 18/03/19.

